

4. ANÁLISIS

4.3

Alternativas y qué hacer

Arturo Sosa A.

Pasado un mes de la intentona golpista la situación política venezolana aún no se ha estabilizado. Muchos cabos quedan sueltos y algunos de los que intentan recomponerse están inservibles. La situación que provocó la intentona golpista no ha variado sustancialmente por lo que no es descartable el escenario de un nuevo movimiento militar. También se han hecho esfuerzos por fortalecer la alianza política que sirve de base al régimen populista de conciliación y gobierno actuales que pueden lograr su recomposición, llegar a las elecciones y recobrar aliento. Una tercera posibilidad está constituida por las presiones que desde diversos sectores de la sociedad civil, de los propios partidos políticos e, incluso, de las Fuerzas Armadas se abran camino hacia una profundización de la democracia.

UN SEGUNDO GOLPE MILITAR

No es sólo una posibilidad teórica. En gran parte depende de cómo se comporte el sistema político en su conjunto. Se ven dos modos distintos en los que podría producirse otro intento de este tipo. La primera como reacción de la institución militar en su conjunto por sentirse desplazada del sistema o agredida por sus actores principales; y la segunda como otra fase de la estrategia del Movimiento Militar Bolivariano, responsable de la intentona del 4 de febrero.

Las Fuerzas Armadas constituyen un organización "cerrada" con un alto grado de identificación consigo misma que se expresa en eso que se conoce como "espíritu de cuerpo". Si bien sus miembros son personas diversas con variedad de percepciones e interpretaciones de realidad, coinciden en su identificación institucional que produce una gran cohesión como cuerpo. El sistema populista de conciliación consideró a las Fuerzas Armadas como una de las élites pactantes. Han sido, pues, consideradas y tratadas como un "sujeto político", aliado del sistema. De hecho, se han convertido en una especie de "estamento" con su propia lógica de funcionamiento, respetada y alimentada por los demás aliados como modo de asegurar su apoyo al régimen.

Es en esta lógica que se entiende que una "democracia" siempre haya tenido como Ministro de la Defensa no a un civil, sino al oficial de mayor rango en servicio, y que éste cese en sus funciones al cumplir los treinta años, plazo en el que todos los oficiales son retirados, de tal manera que el cargo de Ministro de la Defensa se cuenta entre los cambios anuales que se producen en todos los niveles de la jerarquía militar. A las FAN está adscrita la Guardia Nacional con funciones primordialmente "policiales" (policía de fronteras, de aduanas, de carreteras, auxiliar judicial, custodia de prisiones y resguardo directo del orden público). De la misma manera, a las FAN se le han encomendado responsabilidades no directamente militares tales como el comando y formación de los cuerpos de policía uniformada, la gestión ejecutiva del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional.

El intento de Golpe del 4 de febrero reveló la existencia de una triple fractura dentro de las FAN: por una parte entre su oficialidad superior y media; por otra parte entre la Guardia Nacional y las otras fuerzas; y entre ellas y las otras élites aliadas fundamentales del sistema hasta ahora vigente. Dentro de las Fuerzas Armadas surgió un grupo, el Movimiento Bolivariano, con pretensión y decisión de convertirse en el "sujeto político" gobernante, en cuyas manos estuviese el poder del Estado. Vencida la intentona golpista por parte de las mismas Fuerzas Armadas, es decir, demostrada en la práctica su "lealtad" como aliado del sistema populista de conciliación, pero puestas de manifiesto sus fracturas internas, crece su sensibilidad institucional ante cualquier movimiento de otros sujetos políticos para disminuir su papel en las relaciones de poder.

Desde el punto de vista de la institución militar es crucial restablecer la unidad fracturada de las Fuerzas Armadas. Esta podría darse precisamente como mecanismo de defensa ante "agresiones" del Gobierno en su intento de recobrar fuerza después del golpe, o de los partidos políticos que ven la oportunidad de mejorar su posición en el control del Gobierno. Si el sector gubernamental o político-parti-

disto insiste en tomar la ocasión para "depurar" las Fuerzas Armadas, colocar en los puestos de mando a gente de confianza de los partidos y tomar represalias contra un número considerable de oficiales, obligaría a los militares a reaccionar como cuerpo en defensa de su integridad poniéndolo en la opción de insurgir contra el Gobierno y tomar el control del Estado.

El Ministro de la Defensa, Gral. Fernando Ochoa Antich, cuya lealtad personal al Presidente Pérez y al Gobierno del que forma parte sólo puede ser puesta en duda por razones "políticas", es decir, por personas del círculo íntimo de Carlos Andrés Pérez que se opusieron a su nombramiento y quisieran aprovechar la ocasión para "pasar factura", ha hecho advertencias públicas al respecto. En diversas declaraciones ha insistido en que se respete el "honor" de las Fuerzas Armadas, en que se sancione a los cabecillas de la intentona con estricto apego a las leyes y en el reconocimiento que se debe a la actuación "leal" de las Fuerzas Armadas tanto en esta ocasión como a lo largo de los treinta y cuatro años de vi-



gencia del sistema populista de conciliación. Un error en el tratamiento de este delicado asunto, vinculado a los cambios dentro de las FAN y a cómo se enfoque y realice el juicio a los responsables de la asonada, puede producir una unidad militar cuyo efecto sea el derrumbe del actual régimen político y de Gobierno.

La otra vía por la que puede producirse un nuevo intento de golpe militar estaría más bien vinculada al desarrollo de los planes del Movimiento Nacionalista Bolivariano Revolucionario-200, responsable del intento del 4 de febrero. Fracasado este intento, el MNRB-200 tendría prevista otra "fase" o forma de acceder al poder. En este sentido, el mensaje del Cmdte. Hugo Chávez Frías a través de la televisión en el momento de reconocer el fracaso de la intentona estaba dirigido, por una parte a salvar el propio Movimiento, por la otra, sería la clave de la forma en que éste debe actuar. Cuándo y cómo se produciría ese nuevo intento depende de cómo se desarrollen los acontecimientos.

Un golpe "corporativo" de las Fuerzas Armadas en su conjunto adelantaría esa posibilidad. En esa posibilidad sería el MNRB-200 quien le pondría "contenido" al gobierno surgido del golpe.

Otra posibilidad estaría vinculada a momentos en que se debiliten los recursos políticos del Gobierno o del sistema. Por ejemplo, un nuevo debate sobre el Golfo de Venezuela que recree un estado de opinión pública de desconfianza en la firmeza del Presidente Pérez en la defensa de los derechos de Venezuela ante las ambiciones de Colombia. O bien, en la oportunidad de la renovación del Alto Mando Militar con los movimientos que esto supone en toda la jerarquía militar. Un nuevo auge de protestas civiles de diversa naturaleza que el Gobierno no sepa manejar. Podría también mantenerse latente hasta los resultados de las elecciones de diciembre de 1992 en las que si se da el pronosticado ascenso vertiginoso del índice de abstención apareciera un sistema político con escaso apoyo social.

En conclusión, conjurar esta posibilidad requiere por parte del Presidente Pérez fortalecer la lealtad existente de las

salida es la percepción de que el 4 de febrero no ha sido más que un aparatoso accidente en el camino, fruto de descuidos y errores secundarios, pero que las bases principales del sistema están sanas y lo que hay que hacer es reforzarlas.

La primera reacción por tanto es presentarse unidos ante el atentado, tal como se intentó en la sesión del Congreso de la República para aprobar por unanimidad y sin discusión el Decreto de Suspensión de las Garantías Constitucionales a las pocas horas del golpe. El núcleo de esta posición es la alianza de C. A. Pérez con Eduardo Fernández. Un Pérez de regreso precipitado a Acción Democrática, buscando garantizarse la mayor base social posible, con un Eduardo Fernández que necesita vitalmente llegar a las elecciones del 93 y que ha demostrado un férreo control de la maquinaria copeyana. El Movimiento al Socialismo (MAS) es admitido como socio menor en esta alianza; para mantenerse en ella debe hacer continuas demostraciones de fidelidad y recibe como contraprestación un espacio minoritario, aunque sea "de tercera fuerza", en los mecanismos de toma de decisión.

Junto a esto una campaña ideológica que intenta identificar al sistema vigente y a este Gobierno con la democracia, alrededor de la cual hay que cerrar filas, presentando cualquier alusión a sus límites o defectos, cualquier crítica, duda, toma de distancia protesta o alternativa como apoyo al "golpismo" y la dictadura. La campaña presenta a quienes se opongan a este gobierno como unos "come niños", reviviendo las etiquetas que se usaron hasta la saciedad con los comunistas y socialistas en el pasado, y hace un llamado a la reflexión para que nos demos cuenta que ellos representan la mejor de las alternativas posibles. En este sentido se propone un "castigo ejemplar" para los militares alzados y un control interno de las FAN que permita el desmantelamiento del MNRB-200.

Se hacen, además, algunos cambios cosméticos en el tren de gobierno, se pone el énfasis de la acción gubernamental en el mentado "megaproyecto social" y se busca encontrar nuevos aires de legitimación por el viejo mecanismo de hacer girar toda la discusión y acción política en torno a las elecciones municipales, de Alcaldes y Gobernadores el próximo diciembre y las presidenciales en año venidero.

La posibilidad de éxito de esta alternativa se basa primero en la inercia social de 34 años, segundo en la probada capacidad de las maquinarias partidistas, con abundantes recursos, además del control que ejercen sobre otras organizaciones sociales, y en la ausencia de alguna alternativa política real e inmediata que

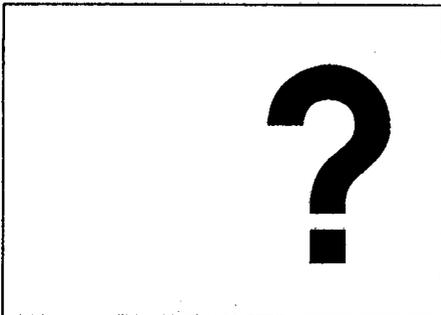
ilusione a la población, la convoque y consiga reunir las energías sociales para abrir un nuevo espacio.

Pero, el 4 de febrero también puso de manifiesto una fractura abismal entre la dirigencia político-partidista y la población, incluyendo la base "militante" de esos partidos. Su capacidad de convocatoria social se ha manifestado nula. El 4 de febrero es una marca imborrable en la relación partidos-pueblo, Gobierno-ciudadanos, de tal manera que cualquier vuelta a la "normalidad" no será vivida como "aquí no ha pasado nada".

PROFUNDIZAR LA DEMOCRACIA

La acción del 4 de febrero, y esto sólo se puede decir porque fracasó, ha hecho ver a muchos venezolanos que no se atreverían a mirar de verdad la magnitud de la crisis política del sistema populista de partidos que la profundización de la democracia es una cuestión de vida o muerte para la nación venezolana. Los defectos acumulados por lo que fue un primer paso hacia la democracia son tan grandes que han logrado que buena parte de los venezolanos sientan que un gobierno militar, por autoritario y dictatorial que se pinte, "no puede ser peor" que lo que estamos viviendo. Ojalá los gobernantes, dirigentes partidistas, sindicales y gremiales, grandes empresarios privados, FEDECAMARAS, cúpulas militares alertadas sientan esta sacudida y puedan levantarse por encima del pequeño círculo visual en el que el disfrute de sus privilegios los ha encerrado y tomen conciencia de la posibilidad cercana de dar al traste con lo poco que hemos avanzado en el camino de unas relaciones democráticas, basadas en una mayor justicia social.

De entre los aliados del sistema populista de conciliación, la Iglesia Católica comenzó hace algún tiempo su acercamiento al pueblo. El empobrecimiento creciente de los venezolanos ha hecho que la Jerarquía Católica manifieste su preocupación por la vida de la gente y por las bases de una auténtica democracia. Las Fuerzas Armadas han mostrado de diversas maneras, hasta la extrema acción de la sublevación armada, su sintonía con las consecuencias del descenso de los niveles de vida de los venezolanos. Los partidos, en cambio, han dejado profundizar la brecha entre las cúpulas y las bases hasta, incluso, olvidar el lenguaje y perder



Fuerzas Armadas hacia el sistema, escuchar a la oficialidad media, erradicar cualquier síntoma de corrupción en su seno y ser muy cuidadoso en evitar la partidización de sus decisiones en materia de ascensos, nombramientos, pases a retiro, etc. Restablecer una auténtica unidad institucional de las Fuerzas Armadas que enfoquen su proceso en el sentido de hacerlas partícipes de un esfuerzo colectivo por profundizar la democracia como sistema político para Venezuela, depende en gran parte de la decisión del Presidente de la República de poner en práctica una política militar cuidadosa y bien diseñada.

LA VUELTA A LA NORMALIDAD

Una segunda posibilidad de desarrollo de la situación política de Venezuela después del 4 de febrero sería el esfuerzo por parte de los sujetos y fuerzas sociales de regresar a la práctica vigente en estos últimos años. El punto de partida de esta

4. ANÁLISIS

la sensibilidad ante los problemas. Los sectores empresariales privados escogieron mirar la realidad a través del prisma mal llamado "neo-liberal", se convencieron a sí mismos, a los principales cogollos y al Gobierno de que era cuestión de poco tiempo la recuperación y se olvidaron de los efectos de la caída. Los signos como la abstención electoral, la constante baja de la creatividad de las instituciones públicas, sus representantes, los partidos y sus dirigentes fueron subvaloradas. Creyeron en una incondicionalidad a toda prueba por parte de una población a la que jamás se la consultó o se la escuchó.

Los resultados están a la vista. Ya no es posible un sistema partidista de conciliación de élites legítimo en Venezuela. La democracia tiene que asentarse sobre otras bases que permitan recuperar lo positivo de la experiencia hasta ahora vivida y que concite la aceptación colectiva de un régimen que represente los intereses reales de una sociedad que ha crecido políticamente, cuyos intereses se han diversificado y que aspira a superar las dificultades actuales para ver el futuro con optimismo.

La democracia venezolana exige la superación del sistema de alianza de élites manejada a través de los partidos populistas. El llamado "bipartidismo" que filtra toda decisión para subordinarla a intereses minoritarios tiene que desaparecer para dar paso a formas de auténtica representación de la compleja diversidad que hoy existe en la sociedad venezolana. Un Parlamento dividido en fracciones partidistas en el que los "jefes de fracción" en pequeño conciliábulo deciden los resultados de cualquier discusión y pretenden presentarlos en nombre del pueblo de Venezuela al que falsamente representan, tiene que desaparecer. El Congreso Nacional debe convertirse en representante de la sociedad. Sus curules deben estar ocupadas por personas cuya selección tenga raíces en un vasto proceso de consulta a toda la sociedad.

Para ello es imprescindible avanzar velozmente en el fortalecimiento de la sociedad civil. Una extensísima red de organizaciones capilares a lo largo, ancho y profundo de todas las actividades económicas, políticas y culturales, que den cauce a la más variada participación de todos los miembros de la sociedad en actividades que la generen, es el cimiento sobre el que hay que fundar un régimen político más democrático.

De igual manera es una urgencia impostergable establecer un Poder Judicial autónomo, apegado estrictamente a las leyes, integrado por personas honestas que crean en la justicia como piso fundamental de una sociedad abierta, plural y democrática en la que los conflictos de intereses se diriman siguiendo el único criterio común expresado en la legislación vigente.

La profundización de la democracia lleva a una transformación radical de los partidos, instrumentos necesarios en el quehacer político cotidiano de una democracia. Ellos constituyen los canales ordinarios de expresión política de los intereses sociales y se convierten en el instrumento de búsqueda y ejercicio del poder necesario para representar esos intereses en las decisiones de gobierno.

Evitar que el 4 de febrero se convierta en ocasión para un regreso al pasado superado de gobiernos militares o en un retroceso a una "normalidad democrática" desprestigiada y carente de legitimidad política exige medidas audaces en la dirección de rehacer la voluntad constitucional de nuestro sistema político y forma de gobierno. Debe ser de la voluntad popular venezolana libremente expresada y cabalmente representada que debe surgir esa nueva Constitución. Esto significa un proceso que es necesario iniciar inmediatamente. Su inicio depende de la capacidad que tengamos de romper la inercia que nos arrastra y la cómoda pasividad en que tendemos a situarnos. Quienes ya participan en toda clase de organizaciones populares, vecinales, civiles, gremiales o partidistas, quienes tienen espacio en los medios de comunicación social y el propio Gobierno tienen la responsabilidad de hacer posible un futuro democrático lanzándose por este camino en lugar de apuntalar lo que se está cayendo.

QUE HACER

Lo peor es quedarse cruzado de brazos esperando la "vuelta a la normalidad" u otro indeseable alzamiento militar que repita el ciclo de desesperación-falsas esperanzas-frustración. Lo sucedido el 4 de febrero es lo suficientemente significativo como para terminar de convencernos de que la posibilidad de una salida democrática para Venezuela depende de la puesta en movimiento de la sociedad civil. Lo primero que hay que hacer, entonces, es salir de la pasividad social a la que nos ha acostumbrado un Estado paternalista y unos partidos populistas que se han encargado por décadas de "pensar por nosotros" y asignarnos tareas fáciles de cumplir como votar cada cinco

años por el color de la preferencia de cada uno y atender los reclamos de servicios públicos...etc.

La movilización ciudadana empieza por la decisión de los ciudadanos de ejercer sus derechos, con o sin suspensión de las garantías constitucionales, y exigir al Estado y al Gobierno el cumplimiento de sus obligaciones dentro del marco de la ley. Un movimiento consistente en esta dirección iniciaría una revolución silenciosa y pacífica, pero profunda, en las relaciones sociales venezolanas. Haría posible la demarcación responsable del espacio de lo público y su funcionamiento como tal.

Hay que aumentar la presión social hacia el Gobierno y hacia los cogollos partidistas para evitar que la fuerza de la inercia los lleve a decidir y actuar como si estuviéramos todavía en el "antiguo régimen". Evitar una nueva asonada militar no se limita a emplear toda la habilidad política aprendida por los partidos para volver a tomar el control de las Fuerzas Armadas y acercarlas como "aliadas" democráticas. Es necesario hacerlos ir al fondo del problema, obligarlos a hacerse cargo de la necesidad de encontrar una nueva fuente de legitimidad democrática, rehaciendo la voluntad constituyente.

Poner en marcha ese mecanismo social que permita fundar una nueva fase de la democracia venezolana en la sociedad civil fielmente representada en las instituciones del Estado, y no en partidos "policlasistas" que se atribuyen esa representación llegando a sustituir a la sociedad y a la voluntad ciudadana, es la urgencia del momento.

En este marco cobrarán nuevo sentido los esfuerzos ya iniciados en esta dirección de reforma del Estado. Procesos como la descentralización política y administrativa, reformulación de los mecanismos de elección de los cuerpos deliberantes y ejecutivos locales, regionales y nacionales, reconstitución del sistema judicial, contarían con la vitalidad propia de una sociedad en proceso de multiplicar sus organizaciones para participar activamente en la vida pública.

También en este marco sería posible formular un modelo de desarrollo económico que rectifique los errores del pasado y se fundamente en las auténticas ventajas comparativas de Venezuela, asegurando un sistema interno de distribución de la riqueza que tienda a la eliminación de las desigualdades, ponga como prioridad la mayor rentabilidad del "capital humano" de la nación y se dirija a la justicia social.

Sólo recurriendo a la creatividad política y social es que se puede asegurar una democracia con un Estado y un gobierno socialmente controlados y una dinámica que desestime y sancione la corrupción.